

El difícil comienzo de la era pos-aristidiana

Arnold Antonin

Entre los desastres políticos, económicos y naturales, una parte de los haitianos ha vivido con dolor el bicentenario de la Independencia de Haití, y en particular la necesidad de una intervención de tropas extranjeras para tratar de estabilizar el país. Este artículo expone las razones de la caída de Aristide, la difícil situación del gobierno de transición y la precaria viabilidad del llamado «consenso de transición política», especialmente ante el desconocimiento de la situación por parte de la cooperación internacional.

Las razones de la caída

En la noche entre el 28 y el 29 de febrero de 2004 Jean-Bertrand Aristide abandonó el poder que había controlado durante 13 años, incluido el paréntesis de 3 años del golpe de Estado militar y los 5 del mandato fantoche de René Preval. Independientemente de los acontecimientos del día de la renuncia, las razones profundas del descontento popular que llevaron a su caída comenzaron a acumularse enseguida, tras su regreso al poder en 1994, traído de vuelta por el ejército norteamericano.

Luego de las primeras elecciones después de su retorno (1995), que llevaron a la Presidencia a Preval –en palabras de Aristide «su hermano gemelo»– en unos comicios que se estima no tuvieron más de un 15% de participación popular, el descontento creció progresivamente. Preval no dio satisfacción a ninguna reivindicación popular y lo único que produjo fueron sucesivas elecciones fraudulentas, creando un bloque común de oposición de todas las fuerzas políticas no pertenecientes a la organización política de Aristide, el partido Familia La-

Arnold Antonin: economista y cineasta haitiano; profesor de la Universidad del Estado de Haití (UDH); director y fundador del Centro Petión-Bolívar de Haití.

Palabras clave: violencia, desarme, intervención militar, elecciones, Haití.

valas (Fanmi Lavalas/Famille Lavalasse). Este gobierno fue un desastre programado, pues tal como afirmaba el humorismo popular, Preval hizo todo lo posible para que su gobierno fuera tan malo que todos pidieran a gritos el regreso de Aristide. En efecto, nunca cumplió sus principales promesas: la reforma agraria y la restauración de la autoridad del Estado. La economía y la ecología se siguieron degradando sin ningún control. Se cometieron asesinatos, como el del famoso periodista Jean Dominique y otros, con la mayor impunidad. Su mayor logro político, que debía ser la entrega del poder a otro presidente democráticamente electo, dio como resultado un nuevo mandato para Aristide, al presentarse éste como único candidato a unas elecciones que tuvieron una participación de solo el 5% de la población, según los cálculos más creíbles.

Si la legitimidad política se adquiere en elecciones libres, y si se mantiene a través de los actos de gobierno, el presidente Aristide, quien comenzó su segundo mandato con una legitimidad diezmada y controvertida el 7 de febrero de 2001, hizo todo lo posible por destruirla totalmente. En el plano político, no tomó en consideración la oposición interna para no tener que compartir con ella el más mínimo porcentaje del poder. Inició unas rondas infinitas de negociaciones estériles con la oposición y la Organización de Estados Americanos en torno de las elecciones fraudulentas, tanto las legisla-

tivas y municipales como las presidenciales de 2000 durante el gobierno de Preval. Sin embargo, no asistió nunca a esas reuniones, y como tantas otras, estas negociaciones terminaron en fracaso. Nunca concedió nada de lo pedido por la oposición en el momento mismo de los hechos, sino mucho después, cuando ya todo había sido superado por nuevos acontecimientos y había perdido importancia. Como político demostró una falta total del sentido de las relaciones de fuerzas reales y del *momentum*. Logró así unir en su contra a todos los grupos políticos, desde la derecha, pasando por los socialdemócratas y socialcristianos, hasta la izquierda marxista-leninista y los altermundialistas. La única excepción que confirma la regla son unos grupitos de nostálgicos de Pol Pot, considerados por muchos como agentes provocadores.

En realidad, las únicas obsesiones de Aristide eran el control absoluto del poder, y las relaciones con los norteamericanos a través de sus muy bien pagados *lobbies*, que convirtieron a un pobre país como Haití en el cuarto en el ránking mundial de *lobbyistas*. De sus lecturas atravesadas de Lenin y de su experiencia durante el golpe de Estado, lo único que pareció retener fue que el principal aparato del Estado a controlar son las Fuerzas Armadas. En consecuencia, eliminó por decreto el Ejército y desestructuró el embrión de policía que había ayudado a formar la comunidad internacional a su regreso

al poder en 1994. Eligió las clásicas técnicas mafiosas y el caos (tan bien descritos por Hannah Arendt en su libro *El sistema totalitario*) como método de gobierno, y el control de la oposición a través de sus bandas armadas de esbirros autodenominados «chimeres». Estos últimos contaron con carta blanca para actuar, bajo sus órdenes y también por su cuenta.

Luis XIV dijo: «Después de mí, el diluvio», Aristide decía «yo soy el diluvio». Aunque después de él, el diluvio o «La Avalancha» (nombre de su partido en créole) continuó causando desastres, como veremos después. Pero lo que más contribuiría a quitarle todo su prestigio serían los escándalos en cascada que se produjeron diariamente durante su gobierno por cuestiones de corrupción grosera, tráfico de drogas a través del jefe del Senado y del jefe de Seguridad del Palacio Nacional, ambos actualmente en prisión, y los crímenes políticos siempre impunes. En este sentido, Aristide, gran seductor en persona, pero con una personalidad juzgada por algunos sicólogos como *border line*, ha sido él mismo su principal enemigo y fue devorado por sus propios demonios, como su banda armada el «ejército caníbal» de Gonaives, que se convirtió en el principal grupo armado en enfrentarlo luego de que asesinaran a su jefe en septiembre de 2004.

En esta cadena de desaciertos, hubo dos hechos destacados en la pendiente de la irrecuperabilidad del sistema de re-

presión aristidiano: el incendio de los locales y residencias privadas de los principales dirigentes de los partidos de oposición el 17 de diciembre de 2001, y el ataque a la Facultad de Ciencias Humanas, que terminó con unos 20 heridos y la fractura de ambas piernas del rector de la universidad, agredido con barras de hierro por los esbirros de Aristide, en presencia de la policía, el 5 de diciembre de 2004. Este hecho marcó el comienzo del fin de su reino, creando un frente de toda la sociedad civil sin excepción, hombres de negocios, estudiantes, obreros, sindicalistas, campesinos, artistas e intelectuales, que incluso logró afiliarse a los más moderados de sus partidarios. Todos estos acontecimientos condujeron a su caída el 29 de febrero de 2004. Una frase pronunciada por Aristide poco antes, anunciaría lo que dejaría tras de sí a manera de herencia: «Si me voy, en Haití reinará la oscuridad tanto de día como de noche».

La herencia

Una de las armas de chantaje de Aristide era la idea de que sin su presencia todo se volvería un caos incontrolable de fuego y sangre, imagen que parecía surtir efecto en algunos ambientes haitianos y en los diplomáticos extranjeros. Era un intento de retener el poder anunciando, a manera de amenaza, la herencia que dejaría al país si se veía obligado a irse. La semana antes de su partida, presintiendo que todo se terminaba para su gobierno, dio la orden a sus bandas de saquear y pren-

der fuego al centro comercial de la capital y otros puntos neurálgicos de la zona metropolitana. Nada escapó a la furia devastadora: los equipos y materiales de las oficinas públicas, escuelas, orfanatos, cines, negocios, depósitos de comida, bancos, etc. Luego seguía en la lista el mismo Banco Central de la Nación, según algunas fuentes informadas.

El 1º de enero hubo también una sospechosa evasión masiva de presos en Puerto Príncipe. Luego, la noche y el día siguiente de la partida de Aristide, los responsables de las prisiones abrieron sin ambages las puertas de los penales, tanto en Puerto Príncipe como en varias provincias, para dejar en libertad a todos los prisioneros. Traficantes de drogas y reos de derecho común, incluyendo a peligrosos ladrones y asesinos, salieron a las calles. Esta acción estuvo también destinada a aumentar la desestabilización e inseguridad en el país. Con los prisioneros comunes, lograron evadirse también los presos políticos del régimen. A todos estos se agregaron varios grupos de deportados de las prisiones de Estados Unidos, muchos de los cuales son de origen haitiano pero ni siquiera tienen esta nacionalidad. Sin familia, sin siquiera hablar el idioma nacional y sin ninguna acusación contra ellos en Haití, por lo cual no pueden ser arrestados, van a aumentar las filas de los potenciales bandidos, con técnicas criminales evolucionadas que no son las típicas artesanales haitianas.

Este último intento de Aristide de no dejar nada tras de sí, para impedir la reconstrucción del país, aceleró su caída y, junto al avance de la rebelión generalizada, fue la gota de agua derramada que hizo tomar a la comunidad internacional, encabezada por EEUU, Francia y Canadá, la decisión final de retirarle su apoyo. Como no pudo quedarse, destruyó al irse mucha riqueza material, y esta lógica sigue aplicándose a través de sus bandas, mucho mejor armadas que la policía. En efecto, desde la ida de Aristide, y en particular desde el 30 de septiembre, fecha de conmemoración del golpe de Estado militar que lo derrocó en 1990, estos grupos lanzaron una operación armada localizada en el centro de la capital y denominada, según fuentes próximas a ellos, «Operación Bagdad», con las siguientes intenciones: 1) crear el terror indiscriminado de manera casi cotidiana, disparando contra la población civil que plena las calles del centro de la capital y constituida principalmente por vendedores ambulantes del sector informal y el comercio en general; 2) crear el terror en la policía, mal armada y preparada, asesinando a muchos de sus agentes, pero evitando en todo lo posible el enfrentamiento directo con las fuerzas de intervención de las Naciones Unidas; 3) ejecutar acciones espectacularmente bárbaras y macabras, como mutilar, decapitar a los muertos y quemar sus cadáveres, policías incluidos; 4) tener bases de repliegue en los principales barrios marginales de la capital, donde mantienen

aterrorizada a la población más pobre y desvalida, robando, violando y asesinando sin piedad. Hay que señalar que desde el 30 de septiembre el número de violaciones de mujeres de clases marginales ha aumentado vertiginosamente. Según cifras de denuncias registradas en hospitales, a fines de 2004 se registraron unas 80 violaciones en solo tres meses. Se considera que esta cifra representa apenas un quinto del número real, ya que la mayoría de las víctimas no denuncia debido al miedo y por la impunidad que existe en el ámbito de la justicia. Actualmente las violaciones se han convertido en un arma política y de terrorismo de las bandas armadas; y 5) armar a numerosos niños para utilizarlos como escudos vivos en las acciones.

Se trata de bandas autónomas, lideradas por jefes de pandillas de barrio particularmente crueles, que a menudo se enfrentan y eliminan entre sí. Los objetivos de sus acciones son claros, y han sido explícitamente formulados por ellos frente a los micrófonos de la prensa como: a) el regreso del presidente Aristide; b) la ruina económica del país; c) la parálisis de las actividades y de los servicios, en particular de las escuelas; d) el aniquilamiento de la policía; e) la ocupación del Palacio Nacional y de la oficina del primer ministro. Sin embargo, a pesar de estos objetivos aparentemente políticos, habría que considerar una última característica: estas bandas no tienen ninguna ideología ni causa social, aparte

del hecho concreto de lograr el regreso de su «jefe», quien les garantiza su poder, sus fuentes de enriquecimiento y la impunidad. Por esto nos parece totalmente estéril el debate sobre si se trata de un movimiento violento, de grupos de terroristas políticos o de simples delincuentes comunes, ya que son un poco de todo. Lo que sí es evidente es que no estamos ante un movimiento social, sino ante bandas con objetivos de delincuencia común, pero manipuladas políticamente.

Pero aparte de esos objetivos del momento, ¿qué busca el jefe ausente? Ya que su regreso inmediato es imposible, conociendo su lógica y psicología las hipótesis más probables son: a) la venganza personal a través del fracaso del proceso de transición hacia una estabilidad política; b) crearse un arma de negociación inmediata para constituirse en fuerza beligerante, continuar interviniendo en el juego de poderes y que se siga hablando de él; c) como la mejor defensa es el ataque, crear un caos tan grande que empiecen a pensar en recurrir de nuevo a él para parar la violencia y garantizar la impunidad.

Como herencia del régimen de Aristide hay que agregar también –aunque este proceso comenzó desde el tiempo de los Duvalier– la destrucción tanto material como administrativa de las instituciones y el saqueo de los fondos de las cajas del Estado. Y no hay que olvidar tampoco el imperio del tráfico de drogas. Pero lo más grave quizás

es la cultura política y social que ha dejado como consecuencia de la pervisión sistemática de todos los significados, las palabras, los principios y los valores democráticos y morales. El uso y el abuso de palabras como paz, amor, tolerancia, solidaridad, honestidad, corrupción, verdad, diálogo, etc., codificadas constantemente en sus discursos para ser interpretadas con el sentido contrario, han creado en la población en general un desquiciamiento y pérdida de valores difícil de recuperar. ¿Qué han hecho el gobierno de transición y las fuerzas militares de la ONU frente a esta herencia?

El gobierno de transición

El actual jefe de Estado provisional es el presidente de la Corte de Casación, Alexandre Boniface, figura prevista por la Constitución en caso de vacío de poder. En realidad, su mandato era de tres meses para organizar las elecciones, pero dada la situación en que quedó el país, por consenso de todas las fuerzas nacionales e internacionales se decidió extenderlo de marzo de 2004 a diciembre de 2005, fecha establecida en el calendario normal electoral luego de las elecciones de diciembre de 2000, para realizar los nuevos comicios. Designado en su puesto de juez por el mismo Aristide, el nombramiento de Boniface despertó algunas inquietudes, pero muy rápidamente se disiparon las dudas: empezó a asumir el papel de jefe de Estado tal como está previsto en la Constitución, dejando al

primer ministro, Gérard Latortue, el rol efectivo de jefe de Gobierno.

Latortue formó un gobierno constituido por técnicos y personalidades independientes, algunos de alta calificación y todas personas respetadas, presentándolo como gabinete de tecnócratas sin partidismo político. Sus principales objetivos fueron definidos como: a) realizar las elecciones; b) luchar contra la impunidad y la corrupción; c) crear un clima de seguridad y estabilidad desarmando a los grupos armados; d) reactivar la economía nacional; y e) realizar grandes trabajos de infraestructura generadores de empleo. Luego de dificultades causadas por la misma característica tecnocrática del Gobierno, y por ciertas declaraciones –a veces demasiado espontáneas– del primer ministro que dejaron en evidencia su falta de base política, el 4 de abril se firmó un documento llamado «Consenso de transición política» entre el jefe de Gobierno, los representantes de los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil y el «Consejo de Sabios». Entre las principales tareas previstas estaba, en primer lugar, garantizar la seguridad de la población con el desmantelamiento de las bandas armadas y la reorganización de la Policía Nacional. En otras palabras, se trataba de terminar con las bandas armadas de Aristide que sembraban el terror, y de desarmar también a los grupos de ex-militares desmovilizados que habían participado en los movimientos armados en su contra en el

interior del país. Por otra parte también se planteaban la reactivación del sector comercial; la puesta en marcha de programas de urgencia económica; la lucha contra la impunidad, poniendo a funcionar el aparato de la justicia, completamente corrupto y paralizado por jueces que actuaban como brazo del Ejecutivo en tiempos de Aristide; lanzar programas de desarrollo económico que pudieran hacer sentir los dividendos del proceso de transición democrática; y tomar todas las disposiciones para la realización de las elecciones. Con base en el «Consenso de transición política», todos los hombres de este gobierno se comprometieron a no participar en las próximas elecciones ni en el próximo gabinete ministerial que resultara de ellas.

En realidad, el mayor acierto del Gobierno ha sido haber logrado compromisos (pese al gran escepticismo que reinaba en los ambientes globales) de todas las instituciones financieras internacionales, bilaterales y multilaterales, de suministrar 1.200 millones de dólares en dos años a las autoridades haitianas, para cumplir con un cuadro de cooperación *ad-interim* elaborado por representantes del Gobierno, de la comunidad internacional y expertos internacionales. Estas promesas de fondos reflejan que el gobierno de transición ha logrado obtener el reconocimiento y el apoyo de prácticamente todos los gobiernos y todas las organizaciones internacionales, incluyendo la ONU, la OEA, la Unión Europea,

etc., con la excepción de la Comunidad del Caribe (Caricom), África del Sur y Venezuela. Estos últimos siguen la tesis de Aristide sobre su secuestro, y consideran su salida básicamente como una maniobra de los norteamericanos. En 2004 abundaron también las visitas oficiales de personajes internacionales de los más altos rangos, pero falta que todas esas misiones se traduzcan en resultados concretos, para que se vean los dividendos del cambio de régimen político.

En efecto, 10 meses después de la caída de Aristide, exceptuando el fin del terror que su misma presencia motivaba, pocos son los frutos del periodo pos-aristidiano. El temor sembrado por sus bandas se ha amplificado e incluso, desde el punto de vista material y objetivo, ahora parecen más y mejor armadas. Por otro lado, muchos de los militares del ejército que disolvió por decreto, con unas características de acción y objetivos diferentes de sus *chimeres*, se han convertido en un segundo frente armado que escapa al control del Estado. Han efectuado ocupaciones de puestos de policía de varios pueblos y otras acciones violentas, han desfilado con sus uniformes militares reclamando la reconstitución del Ejército, el pago de sus prestaciones y un local donde funcionar hasta que sean reintegrados definitivamente, y se niegan a deponer las armas. Estos grupos, muchos de cuyos componentes están ya en edad de retiro, dan una imagen patética del antiguo ejército que domi-

naba el país, pero no dejan de constituir un desafío claro a la autoridad del Estado y un peligro latente para la estabilización de Haití. Hay que tener en cuenta también que en los pueblos donde se han instalado, Petit Goave, Hinche, Mirebalais, etc., cuentan con una base de apoyo popular, ya que a falta de una policía y justicia del Estado, han ofrecido protección a la población contra los delincuentes comunes y las bandas de *chi-meres* del régimen de Aristide, y declaran que pueden garantizar la seguridad que no dan la Policía Nacional ni las fuerzas de la ONU. El gobierno interino no había querido asumir la responsabilidad de tomar una decisión frente a este problema, limitándose a crear una comisión de estudio del caso, hasta que el 16 de diciembre de 2004 uno de estos grupos armados de ex-militares decidió ocupar la bellísima mansión privada de Aristide, que ya había sido saqueada por las mismas bandas de *chimeres* luego de su partida. Este grupo presentó las habituales reivindicaciones, pero esta vez, ante la relevancia del hecho, en plena capital, tanto el Gobierno como las fuerzas de la ONU decidieron actuar. Luego de tres días de negociaciones se logró una salida pacífica en la que el grupo entregó las armas. El Gobierno decidió entonces acelerar el proceso de pago de las pensiones comenzando en diciembre mismo.

La policía, a pesar de algunas acciones de depuración, sigue siendo corrupta y sigue penetrada por elementos in-

troducidos por Aristide, y además sin ninguna formación profesional. Sin embargo, algunos agentes continúan trabajando de modo heroico en defensa de la población. De ellos, 15 han sido asesinados por los *chimeres*. La delincuencia común, los secuestros y los robos paralizan al sector privado y desalientan las inversiones. Hasta ahora y a pesar de algunos esfuerzos del Ministerio de Justicia, el Poder Judicial parece paralizado. Los jueces no se ocupan de dar curso a los expedientes y la impunidad está vigente. Si algunos grupos de derechos humanos del exterior han hablado de violaciones de los derechos de los partidarios de Aristide que han sido arrestados, los más importantes grupos de derechos humanos haitianos subrayan sobre todo la insuficiencia de medidas contra los secuaces del ex-mandatario que cometen crímenes diariamente, y contra Aristide mismo. El 12 de noviembre pasado el primer ministro informó que iban a lanzar un mandato de arresto internacional en su contra por corrupción y por estar implicado en crímenes políticos. Hasta ahora no se ha concretado. Por otra parte, se crearon dos comisiones de lucha contra la corrupción y el lavado de dinero que se espera den algún resultado.

Aunque la tasa de inflación se haya reducido, los altos costos de los productos de primera necesidad, el desempleo de siempre, de un 60%, y el subempleo hacen que la miseria extrema siga instalada y la población no sienta ningun-

na mejora. Las condiciones de salubridad siguen siendo pésimas. En primer lugar, apenas si se ha comenzado a ver un esfuerzo de recoger, en algunos lugares, la basura doméstica acumulada en las calles. Todos los demás servicios públicos, incluyendo los hospitales y las escuelas, a excepción del servicio de electricidad que ha mejorado un poco, siguen en el mismo estado comatoso.

Una mención muy especial merecen en este panorama los desastres naturales que azotaron Haití en 2004. En mayo, catastróficas inundaciones arrasaron pueblos enteros, como Mapou y Fond-Verretes. Luego, en octubre, la cola del ciclón Jeanne tocó el norte del país y casi borró del mapa a la importante ciudad de Gonaïves, matando a más de 2.000 personas, lo que en comparación con el maremoto del Océano Índico significó cinco veces más víctimas en Haití que en Asia, considerando la población del país. Estas catástrofes naturales anunciadas desde hace años por expertos pusieron en evidencia la ausencia del Estado, que no supo frenar la deforestación y la degradación del medio ambiente para prevenirlas, y sobre todo que no pudo organizar la asistencia a los damnificados. Pero lo peor es que estos desastres naturales pueden ser solamente el principio de una cadena de otros de igual o mayor magnitud en diferentes zonas del país, comenzando por el mismo Puerto Príncipe. En la capital, el peligro es aún mayor debido a la gran concentración de

población y a las construcciones anárquicas y precarias en pleno flanco de montaña, lo cual podría producir un desastre como el ocurrido en Caracas hace algunos años. Para evitar o reducir los riesgos, aunque ya es un poco tarde, se imponía tomar medidas; así, luego del desastre de Gonaïves se anunció con gran bomba el cierre de las canteras de Laboule, que constituyen un grave peligro de derrumbes para una buena parte de la ciudad. Sin embargo, el Gobierno, ante la presión de los camioneros y obreros que quedarían sin trabajo y amenazaban con bloquear la ruta, difirió, como en otros casos, la aplicación de esta medida.

En conclusión, en cuanto a la restauración de la autoridad del Estado, destruida por Aristide, este gobierno de transición no ha dado ninguno de los resultados esperados. En efecto, siendo una administración provisional, cuyos miembros no aspiran a participar en las próximas elecciones, se esperaba que cumpliera con su deber de enderezar muchos problemas, incluso tomando medidas que la población rechazaría. Sin embargo, no habiendo recibido en los primeros 10 meses de su mandato ni un centavo de los fondos prometidos por los organismos internacionales desde hace meses –que hubieran servido para crear al menos trabajos de alta intensidad–, prefirieron la inacción o peor, vacilar o echar para atrás algunas medidas muy necesarias para el medio ambiente o contra la corrupción. Dan así la imagen de un equipo débil

y vacilante, convirtiéndose cada día más en un gobierno casi impopular y sin bases sociales; paradójicamente, en buena parte por no haber tomado medidas inadecuadas que hicieran ver que había un intento de cambio de rumbo radical, y que abriera el camino para la próxima administración. Cabe agregar que la Misión de la ONU tampoco ha ayudado mucho en este sentido.

La cooperación internacional: entre la solidaridad y el desconocimiento de la realidad

La actitud de la comunidad internacional hacia Haití ha oscilado desde siempre entre la franca hostilidad, el desprecio, el paternalismo y la solidaridad. Durante el periodo colonial, Francia, España e Inglaterra se disputaron el dominio del territorio haitiano. Luego, a estos países se agregaron EEUU y Alemania durante el siglo XIX, tomando el primero el papel hegemónico, ya en el siglo XX, con una ocupación militar de 19 años (1915-1934). En los primeros tiempos después de la Independencia, la actitud fue de franca hostilidad y de agresión. En la época contemporánea se vivió la hostilidad a la dictadura fascista de François Duvalier por parte de los demócratas, y el apoyo a la misma por parte de las grandes potencias, siguiendo la lógica de la Guerra Fría.

Después del golpe de Estado contra el primer gobierno de Aristide en 1991, ocurrió el despliegue de 20.000 hom-

bres del ejército norteamericano para devolverlo al poder, en una segunda intervención militar pedida esta vez por una mayoría del pueblo haitiano en 1994. Diez años después, la noche misma del 29 de febrero de 2004 en que el presidente Aristide renunció, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el envío de una Fuerza Multilateral para Haití *ad-interim* (FIMH), constituida por tropas canadienses, francesas y chilenas, dirigidas por EEUU, con el objetivo de ayudar a la policía haitiana a mantener la paz y la seguridad, pero éstas no mejoraron con su llegada. El 1º de junio de 2004 la FIMH fue sustituida por la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah), integrada principalmente por tropas latinoamericanas bajo el mando de Brasil. Éstas fueron enviadas por un periodo de seis meses que ya ha sido renovado por otros seis, hasta junio del presente año. El 12 de julio de 2004, Gabriel Valdés, diplomático chileno, fue nombrado representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la Minustah.

En un principio, la gran mayoría de los haitianos recibió a estas nuevas fuerzas de seguridad con cierta alegría, pensando que estos soldados, bien preparados y muy bien armados en comparación con los efectivos de la Policía Nacional, iban a acabar finalmente con la violencia y anarquía que paralizaban la vida normal del país. Además estaba el hecho de que la mayoría de las tropas y el comando de las mismas

provenían de Brasil, país de uno de los equipos de fútbol más famosos del mundo: los haitianos son grandes fanáticos de este deporte y muy en especial del equipo brasileño y del argentino, a tal punto que en tiempos de campeonatos se identifican con estas dos nacionalidades y se llaman a sí mismos «brasileños» o «argentinos», usando sus banderas en ropas y vehículos. A esto se unió el hecho de que el presidente Luiz Inácio «Lula» da Silva personalmente, junto al primer ministro haitiano, Latortue, promovió un encuentro amistoso entre la selección nacional haitiana y la de Brasil, incluyendo a estrellas del balompié brasileño encabezadas por Ronaldo, el 18 de agosto de 2004.

Pero este entusiasmo pronto se disipó. El desarme de los grupos armados nunca comenzó. Ni siquiera el 30 de septiembre, cuando luego de un corto periodo de relativa calma debido a las vacaciones, los pandilleros lanzaron la famosa «Operación Bagdad», y ante la pasividad e incapacidad de la Minustah (hasta diciembre solo habían llegado unos 3.000 de los 6.000 hombres previstos, según declaraciones del *staff* de la Misión), comenzaron a actuar libremente y con total impunidad. Esta situación se transformó en una espiral de violencia que aún no ha terminado y que en tres meses produjo más de 150 muertos entre la población civil más pobre. Ante estos hechos, la opinión pública haitiana y hasta sectores oficiales empezaron a lanzar críticas

abiertas a la Minustah. Cada intervención en la radio del general en jefe de las tropas, minimizando los hechos de violencia en Haití, comparándolos con la situación en Brasil y otros países de América Latina y pidiendo a los haitianos ser pacientes, optimistas y no exagerar el peligro que constituyen las bandas armadas, no hacía sino aumentar las críticas. Mientras tanto, los organismos de la ONU y las embajadas a menudo aconsejaban a su personal sacar a sus familiares de Haití, y no pocos países recomendaban a sus ciudadanos abstenerse de visitarlo, por su alta peligrosidad. No eran solamente los haitianos los alarmistas.

¿Cuál es la explicación de esta actitud del comando de la Minustah? Para comenzar, según su propia opinión, tardaron seis meses en reunir el contingente previsto y organizar las tropas. Además parece que hubiera habido una cierta ambigüedad en el mandato de la Misión y en el concepto mismo de la seguridad que venían a dar. También era evidente un cierto temor a actuar en un terreno desconocido desde el punto de vista físico, del idioma y de la cultura. Los barrios marginales de Haití son verdaderos laberintos sobrepoblados donde viven cientos de miles de personas que solo hablan créole haitiano. En estas condiciones, temían agredir a la población civil y ser vistos como una fuerza de represión y no de paz. Por otro lado parecían creer que las pandillas armadas eran una expresión política del sentir

de esas poblaciones pobres. Con el pasar de los meses y las experiencias vividas en carne propia, empezaron a entender que los habitantes de esos barrios son rehenes y primeras víctimas de los grupos armados. Además, tampoco querían verse acusados de haber venido a violar los derechos humanos, sobre todo considerando que las bandas o pandillas de Aristide usan como vanguardia a niños y menores armados. Todas estas ideas se les mezclaban con otras debido a la extrapolación y generalización de algunas situaciones latinoamericanas, muy diferentes en sus orígenes y en su naturaleza a la haitiana, pese a las apariencias, fomentadas por la propaganda pro-lavalasiana.

En realidad la violencia que se está viviendo en Haití no es un producto espontáneo de la población en situación de miseria que lucha día a día por la supervivencia. Esta violencia de bandas armadas hasta los dientes, enriquecidas con la política y el tráfico de drogas, es un fenómeno relativamente reciente. Surgió bajo el régimen de Aristide, quien por su concepción del manejo del poder transformó pandillas de barrio en bandas armadas, a partir de su regreso en 1994, para reprimir de manera disfrazada a la población que comenzaba a rebelarse contra la corrupción y los crímenes políticos. El peligro del mal enfoque del tan mencionado «desarme» nunca realizado es que en vez de conducir a la estabilidad política del país lleve, como para-

doja, a la estabilidad de una violencia endémica, esta vez similar a la de otros países latinoamericanos. A todo esto hay que agregar el oscuro juego geopolítico que nunca falta. La campaña presidencial norteamericana de noviembre llevó la contienda electoral hasta Haití, donde demócratas y republicanos estadounidenses, así como también los opositores de Bush del ámbito mundial, se disputaron los votos de los electores de origen haitiano en EEUU. No hay que subestimar tampoco la ingenuidad y el simplismo maniqueo de algunos sectores progresistas, en EEUU mismo y en otros países, que, por cuanto Aristide se presenta como una víctima de los norteamericanos y de Bush, automáticamente piensan que es «el bueno de la película», sin contar el chantaje del color de la piel cuando se presenta como un pobre negro víctima de la discriminación.

Pero lo que no debemos dejar de subrayar es que por primera vez un país de América del Sur dirige una misión de la ONU en Haití, y que los principales países que la componen, Brasil, Chile y Argentina, parecen decididos a hacer que cambie el enfoque tradicional para que su presencia no sea solo militar y momentánea: se busca que el conjunto de la comunidad internacional, en particular de los países ricos, se comprometan con el desarrollo sostenido de Haití. En vísperas del 16 de diciembre, fecha simbólica de la primera toma del poder de Aristide en 1990, para cuando sus pandillas habían

anunciado fuertes acciones violentas en la capital, la Minustah decidió emprender acciones de neutralización de los bandidos en los barrios marginales de Puerto Príncipe dominados por las bandas armadas. Se logró capturar y neutralizar a varios importantes jefes de las pandillas y desde entonces se ha sentido una leve mejora en la situación general de inseguridad. Pero hay algo que convierte en necesidad imperiosa el que se logre al menos una relativa estabilización y seguridad en el país: las inminentes elecciones generales que deben realizarse a toda costa antes de diciembre de este año. Entonces podrán evaluarse finalmente los resultados de la Minustah y del gobierno provisional, ya que sin seguridad puede haber elecciones, pero con poca o casi ninguna participación popular.

Independientemente de ese hecho, según algunos sectores de la comunidad internacional otra condición importante para la realización de las elecciones es la participación de Lavalasse como partido político. Pero hasta ahora, como podía esperarse, esta organización se ha rehusado a participar en el proceso. Para analizar este espinoso problema es necesario remontarse a los estatutos mismos del partido, que proclaman a Aristide como su líder «único y vitalicio», es decir, un partido donde nadie puede sustituir al jefe máximo mientras este viva. Además, Lavalasse no tiene cuadros con jerarquías claras establecidas y muy pocos de sus seguidores reconocen estar inscritos en el partido. Para

completar el panorama, se plantea que es necesario dialogar con Lavalasse, pero allí no se encuentran interlocutores definidos e incluso ninguno de los que podrían aparecer como dirigentes conocidos, fuera de Aristide, quiere tomar una posición clara y algunos hasta confiesan el temor de ser eliminados físicamente por órdenes del expresidente. Muy probablemente al líder de Lavalasse le será muy conveniente la abstención, ya que si hay poca participación –en medio del terror y la inseguridad– podrá argumentar que todos los que no votaron son sus partidarios. Por otro lado, sería interesante que Lavalasse participara en las elecciones para poder medir su popularidad real en la actualidad.

Conclusiones y perspectivas

El recién concluido año del Bicentenario de la Independencia de Haití ha sido el de todas las pruebas para el país. Entre el desastre político y económico y las catástrofes naturales, y en particular la necesidad de una intervención de las tropas extranjeras para tratar de estabilizar la situación, parte de los haitianos ha vivido estos momentos con dolor. Por otro lado existe el sentimiento de que finalmente se ha tocado el fondo del abismo y de que esta es la oportunidad del resurgimiento. De todos los años en que se ha dicho «éste es el decisivo», 2005 es sin duda el más decisivo. En este sentido, es posible prever varios escenarios a corto y mediano plazo.

A corto plazo. 1) Se logra realizar el desarme y neutralizar las bandas armadas, creando un clima de paz y confianza propicio para la realización de las elecciones –locales en primer lugar y luego legislativas y presidenciales en diciembre–, con una buena participación popular. Esto dará lugar a un gobierno democrático de indudable legitimidad. 2) No se desarman las bandas. El clima de inseguridad se mantiene. Pese a todo se realizan las elecciones, con muy poca participación, dando lugar a un gobierno muy débil desde sus inicios. 3) Antes del periodo electoral la violencia política de las bandas armadas llega a tal punto que logra impedir o abortar las elecciones, tal como ocurrió en 1987, luego de la caída de Duvalier, debido a una masacre orquestada por el Ejército el mismo día de las elecciones. Este último escenario significaría el fracaso de la Minustah y del gobierno de transición, y una victoria pírrica de Aristide. De estas alternativas, la más probable es la segunda, aunque no se pueden descartar las otras dos. Todo depende de lo que se haga en este sentido los tres primeros meses de este año.

A mediano plazo. Si se realizan las elecciones, por el lado haitiano, vista la cantidad de partidos políticos en juego, el futuro dependerá de un pacto de gobernabilidad que logre una agenda nacional común por la cual, en el terreno político, se acepte el principio de la alternancia en el poder y el respe-

to a la oposición, para que deje de ser vista como un enemigo a destruir, y en el ámbito económico y social, se aborde la lucha contra la pobreza con la formación de recursos humanos y la regeneración del medio ambiente. Esto es necesario sobre todo teniendo en cuenta que todavía existen muchos «pequeños Aristide» potenciales que aspiran al poder. Por el lado de la comunidad internacional, el futuro dependerá de un compromiso firme y efectivo de respeto a las promesas de acompañar este proceso hasta que sea viable, apoyando con generosidad y decisión un plan de desarrollo nacional que termine con la eterna ayuda humanitaria a Haití. Si se logran esas condiciones, el escenario ulterior del país puede ser bastante optimista, pero en caso contrario el proceso de degradación puede seguir en una espiral interminable.

El pueblo haitiano ha luchado sin descanso durante toda su historia para liberarse de la tiranía de turno y tener una mejor calidad de vida, y por eso merece la solidaridad del mundo entero. Lo que está claro hoy en día es que la situación sería muy diferente y generadora de mucho más optimismo sin las acciones de las bandas armadas, que –sin subestimar males endémicos como la corrupción y la incompetencia, entre otros– son las que han frenado hasta la fecha el arranque hacia un futuro diferente, tan deseado por todo el pueblo haitiano.